

Auto int.: 058 de 2023
Procedimiento: Verbal
Demandante: Inversiones Pilarica Real S.A.S
Demandada: Inversiones Builes Mira Y CIA en C.S y otros
Radicado: 05001 31 03 013 2021 00115 01
Asunto: Rechaza decreto de pruebas en segunda instancia.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, veintiséis (26) de julio del dos mil veintitrés (2023).

1. Solicita el apoderado recurrente que, como prueba en segunda instancia, con fundamento en el artículo 327.2 del C. G del P. “...se fije fecha y hora para que comparezca de manera física, el señor **FRANCISCO JAIRO SALINAS CORREA**, identificado con el número de cédula 702.926 domiciliado en la ciudad de Medellín, Antioquia; REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD BUILES MIRA Y CIA en C.S...” advierte que el objeto de la prueba es “...El rol que desempeña como representante legal suplente de la SOCIEDAD BUILES MIRA Y CIA en C.S, las facultades que le han asignado los estatutos y la ley, además de los hechos plasmados en la demanda, concretamente los hechos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24...”

2. Bien, debe recordarse que las pruebas en **el curso de la segunda instancia** y salvo la oficiosidad del juez o magistrado, están regladas, no solo en su oportunidad para proponerlas, presentarlas o aducirlas, sino que el legislador, dentro de su libertad de configuración, estimó los eventos en que ellas eran procedentes.

No en vano la normativa contenida en el art. 327 del C. G. del P. señala con claridad solar “...las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos: “...1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo. 2. **Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.** 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior...”

De suerte que, independientemente del análisis de su conducencia, pertinencia o utilidad de la prueba en sí misma considerada, los condicionamientos a que se contrae la norma referenciada constituyen un insoslayable valladar, no solo para la parte interesada en el decreto de la prueba, sino para el funcionario al momento de pronunciarse si la decreta o no, como que, de no haber una correspondencia entre la prueba pedida en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella es procedente, conforme viene de verse, la negativa de su decreto, se impone.

2.1. En este caso, al analizar la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante, se observa que su petición tiene la irrefragable finalidad de reemplazar las oportunidades probatorias brindadas por la ley procedimental para la práctica del interrogatorio a las partes, en este caso del demandado **Francisco Jairo Salinas Correa**, además, la procedencia de la prueba en este segundo grado, no se agota proponiendo la inteligencia que desde la particular óptica del solicitante debe dársele al caudal probatorio que se adjunta con la solicitud.

Cumple anotar, que se allegó al juzgado por la parte demandada, ese mismo 19 de octubre de 2022, la excusa médica del señor Francisco Jairo Salinas Correa (pdf. 42), la cual fue también exhibida en el transcurso de la audiencia al funcionario de primera instancia, punto frente al cual señaló: *“...de conformidad con el artículo 372 se prevé que la inasistencia de las partes, podrá ser justificada dentro de los tres días siguientes a la audiencia por lo tanto no se observa ningún óbice para la continuación de la misma y recibiremos entonces la excusa médica...”*

Como viene de verse, si la parte demandante consideraba que esa declaración era trascendental para el proceso, al punto de requerir el aplazamiento de la audiencia o, si era suficiente o no esa excusa médica y, si el juez aplicó o no las consecuencias procesales y pecuniarias previstas en la ley, es un asunto que debió ser debatido antes de concluir la etapa procesal de interrogatorio o, por lo menos, de saneamiento, pues el juez no lo vio así, lo contrario, es desatender el principio de irreversibilidad del proceso, decisión que transcurrió con el más hondo silencio de la parte demandante, la cual, como parte interesada en la práctica de la prueba, tan siquiera presentó

ningún reproche, al menos, por vía del recurso de reposición; permitiendo así que se llevara a cabo la etapa final de la audiencia, como lo es la sentencia y, por ahí mismo, sepultó la posibilidad que la prueba fuera practicada en la primera instancia y con mayor razón ahora en la segunda instancia se hace inviable su práctica.

Tal omisión demuestra un descuido en el proceso, en cuanto se refiere a la prueba que ahora extraña el apelante, de manera que no le asiste razón al afirmar que la prueba se dejó de practicar sin culpa del interesado. Por consiguiente, para lo que interesa a esta función jerárquica que nos congrega, no se observa la correspondencia entre la prueba solicitada en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella es procedente.

3. Por lo expuesto, resulta improcedente a esta Corporación acceder al decreto y práctica de las pruebas pedidas en segunda instancia, ya que, se insiste, no se encuentran inmersas en ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo 327 del C. G. del P., que hagan viable su decreto, por ellos se despachará negativamente la solicitud.

De esta manera, y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín***, Sala Unitaria Civil de Decisión,

II. RESUELVE:

Negar la solicitud de pruebas elevada por el apoderado de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIAN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado